

**¿El retorno del leopardo?
Patrimonialismo y crisis post-transición en la República Democrática del
Congo**

Koen VLASSENROOT y Timothy RAEYMAEKERS*

En la República Democrática del Congo, las esperanzas siguen siendo muchas en la medida en que se espera que este país se mueva hacia la paz y la democracia. Recientemente, los ciudadanos congoleños han podido votar un nuevo presidente (Joseph Kabila), un nuevo parlamento y asambleas provinciales. Estas elecciones no sólo representan un final oficial del proceso de transición político introducido hace tres años por la comunidad internacional (2003), sino que también son el primer voto democrático desde hace cuatro décadas (1965). De cualquier forma, es poco probable que el proceso de paz y las elecciones en el Congo lleven a la democracia si no se acompañan de una transformación de las estructuras de gobernanza política. Éste artículo argumenta que el proceso de paz y el proceso de transición consecutivo han señalado algunas debilidades cruciales de las intervenciones internacionales en las zonas en conflicto de África: más que pavimentar el camino hacia el gobierno democrático y transparente, parecen confirmar las estructuras de explotación y exclusión existentes. Mientras que sería erróneo castigar sólo a la comunidad internacional, esta observación suscita serias preguntas acerca de los actuales esfuerzos internacionales para instituir la paz y la democracia en sociedades afectadas por la guerra.

Los límites de compartir el poder

El primer elemento a destacar es que todo el periodo de transición en la República Democrática del Congo (2003-2006) se ha caracterizado por altos niveles de violencia física y estructural. Tras un periodo de estabilidad relativa en 2005, las tensiones aumentaron considerablemente tanto en Kinshasa como en el resto del país, como consecuencia de la fiebre electoral así como de una serie de confrontaciones militares. En algunas zonas rurales, la situación a día de hoy puede incluso ser peor que la de seis años atrás, tras la firma del acuerdo de alto al fuego de Lusaka (1999). Un buen ejemplo de esta tendencia es Ituri, donde la violencia no sólo aumentó dramáticamente durante la fase crucial del proceso de transición

político en 2003, sino que además la caza de milicias “irregulares” desde 2005 ha llevado a desplazamientos masivos: en mayo de 2006, más de 10 000 personas fueron desplazadas como resultado de operaciones conjuntas ONU-RDC contra esas milicias. Una situación similar ha sido observada en el norte de Katanga, donde una multitud de grupos Mayi-Mayi locales continuaron desestabilizando numerosas partes de esa provincia. En lo que ha venido a conocerse como el “Triángulo de la Muerte”, estos grupos armados han estado cada vez más en contra de la población civil. Finalmente, las continuas confrontaciones militares en áreas menos accesibles del sur y norte de Kivu han causado un significativo aumento de la violencia. En estas provincias, una multitud de pequeñas milicias locales no integradas, como las milicias hutu-ruandesas, siguen controlando amplias partes del interior y condicionan la vida diaria de las personas. Así, informes recientes sobre la crisis en el Congo parecen sufrir cada vez más de un síndrome de “Irak”: descrito bien como una guerra civil no declarada, o como un proceso de negociación política con algunos reveses; la pregunta real es si la guerra que ha tenido lugar en ese país desde hace una década ha terminado de hecho.

Este incremento de la violencia desde el final oficial de la guerra no sólo expresa las tensiones exacerbadas que han resurgido durante el período electoral sino que también es la consecuencia de un proceso de transición en el que la estrategia central de construcción de la paz ha sido el compartir el poder antes que la restauración de la legitimidad política. Andreas Mehler y Denis Tull¹ ya señalaron que, a menudo, la peor violencia en África ha ocurrido después de la intervención del mundo extranjero para crear acuerdos para compartir el poder entre élites rivales. En la capital del Congo, Kinshasa, y más allá, los riesgos del poder político incrementaron gradualmente a medida que las fuerzas rivales y las milicias (a menudo con serios historiales criminales) competían por un sitio en el gobierno nacional futuro. Ya ha sido mencionado anteriormente: el mensaje del proceso de transición del Congo ha sido el de “la violencia retribuye”². La combinación de una fórmula política de todo-en-uno (donde fuerzas rivales comparten el poder dentro de un gobierno de transición unitario) y la competición electoral “democrática” ha hecho que los competidores políticos sean sustancialmente conscientes de las ventajas – algunos dirían incluso necesidades – de aferrarse al poder, mientras que al mismo tiempo les ha enfrentado a la amenaza de una derrota política no reversible.

Esto explica por qué muchos líderes de milicias han tratado de asegurarse un lugar en las nuevas estructuras políticas y militares, con el fin de evitar persecuciones judiciales por actos cometidos durante la guerra. La estrategia (inter)nacional hacia los antiguos señores de la guerra y líderes rebeldes de Congo ha sido, como poco, ambigua: tildando algunos de ellos como meros criminales de guerra mientras que aceptaba otros como comandantes en el ejército unificado, o les ofrecía posiciones políticas en las instituciones de la transición, del gobierno congoleño y del CIAT (Comité Internacional de Apoyo a la Transición); ha confirmado el mensaje de "la violencia funciona". Por un lado, éste CIAT ha perseguido activamente la acusación de un grupo miliciano en Ituri, con su líder principal actualmente frente a la Corte Criminal Internacional de La Haya. Por el otro, muchos otros líderes de milicias sospechosos de crímenes de guerra siguen moviéndose libremente en Congo, incluso en Ituri, donde actualmente están negociando activamente su entrada en el nuevo ejército unificado. Algunos de estos incluso se las han arreglado para ser comandantes en el nuevamente integrado ejército congoleño. Esta actitud ambigua hacia los antiguos y actuales señores de la guerra de nuevo suscita preguntas cómo ¿hasta qué punto la estrategia actual para compartir el poder está facilitando la paz y la estabilidad en la RDC? Dejando de lado la pregunta de si sus reivindicaciones son legítimas o no, el mensaje que la comunidad internacional está mandando a los señores de la guerra del Congo es el siguiente: sólo si vuestra implicación es tan importante que la estabilidad no pueda lograrse sin vosotros, podréis estar seguros de tener un sitio en la mesa de negociación. Como resultado, numerosos líderes de milicias no integradas (o "irregulares") han tratado de empujar al nuevo gobierno a una posición de negociación. Un ejemplo interesante es el caso de Laurent Nkunda, un rebelde de larga fecha que decidió no apoyar el proceso de paz y crear su propia base de poder en Kivu del Norte. Su búsqueda de apoyo popular ha ido a la par que un crecimiento militar constante, sólo por si se diera el caso de que la primera estrategia de compartir el poder político fallara. Cuando el gobierno de Kinshasa fracasó militarmente en la negociación con Nkunda, no tuvo otra opción que comenzar a negociar. Su fuerza militar forzó al gobierno de Kabila a empezar las negociaciones con Laurent Nkunda. La estrategia de Nkunda pronto fue repetida por otros antiguos comandantes rebeldes, que decidieron luchar para colocarse en una posición negociadora con respecto al gobierno central. Estas dinámicas indican

que una estrategia de estatalidad “mediada”³ parece ser la única que el gobierno congoleño tenga a su disposición para extender su autoridad, porque actualmente carece tanto de los medios como del poder para reclamar el control físico sobre las regiones más periféricas, como las zonas fronterizas en el suroeste y este de la RDC. El recientemente electo régimen congoleño se ve cada día más obligado a depender de un abanico de rivales diversos o de autoridades paralelas para ejecutar funciones centrales de gobierno, como la redistribución económica y la provisión de seguridad, que simultáneamente permiten a estas estructuras de poder locales consolidar su poder.

El complejo de guerra congoleño

La razón por la que el proceso de paz parece no ser capaz de terminar con el ciclo de violencia, está en gran medida relacionada con el proceso de fragmentación que se ha desarrollado durante la guerra y que ha creado un *patchwork* de pequeñas zonas de control económico y militar. Particularmente en el este, numerosos actores armados han sido capaces de instituir sus propios mecanismos de control, protección y provecho, haciendo de esta parte del país un complejo de guerra que ya no puede desenmarañarse. Esto dio al conflicto congoleño una imagen de guerra luchada por avariciosos comandantes armados, en vez de ser conducida por la lucha política.

En los orígenes de esta prolongada crisis está la unión de las dinámicas locales, nacionales e internacionales de conflicto. A principios de los 90, un proceso de profundo “colapso” estatal (consecuencia de treinta años de mobutismo) provocó una competición intensificada por la participación política y el acceso a bienes económicos, especialmente en las provincias del este de Kivu. La lucha violenta que ha resultado de ello, progresivamente enfrentó a comunidades étnicas enteras unas contra otras, a menudo dirigidas por múltiples “emprendedores” políticos. En 1993, la creciente competición entre comunidades ruandeso-parlantes y poblaciones autóctonas por la representación política y el acceso a la tierra condujeron a un primer estallido de violencia, matando a varios miles de personas. Después de la llegada de más de un millón de refugiados hutu-ruandeses en la región congoleña de Kivu (1994), las dinámicas locales de conflicto estuvieron cada vez más entremezcladas con una lucha regional por el poder en la región africana

de los Grandes Lagos. Las milicias hutu-ruandesas comenzaron a atacar tutsis locales de Zaire, así como al nuevo régimen en Ruanda. La coalición regional creada en 1996 para resolver este problema regional de seguridad encontró pocas dificultades para abrirse paso a través de la debilitada defensa mobutista. Siete meses tras su creación, la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL) llegó a Kinshasa e instauró a Laurent Désiré Kabila como nuevo presidente del país. Lo que se esperaba que fuera el final de una crisis regional y nacional, pronto puso en marcha un proceso de fragmentación política. El creciente desacuerdo entre el nuevo régimen congoleño y sus apoyos extranjeros instigaron la formación de un nuevo movimiento rebelde, esta vez en contra del régimen de Kabila.

A su vez, el Rally Congoleño por la Democracia (RCD) puso en marcha la formación de un complejo de guerra regional, incluyendo la implicación de varias naciones africanas y de numerosas milicias locales y extranjeras. La fragmentación total del horizonte político-militar fue en estrecha relación con la disolución de las agendas políticas en intereses más locales e individuales, y con una creciente militarización de la sociedad. El acuerdo de alto al fuego de Lusaka, en vez de parar la lucha, condujo a una progresiva división del territorio en una serie de enclaves territoriales en manos rebeldes, que consistían en una serie de complejas formaciones transfronterizas entre élites locales, actores regionales armados y varias fuerzas transfronterizas⁴. En algunos casos, estas emergentes alianzas entre actores rurales armados, emprendedores económicos y autoridades administrativas durante la guerra creó cierto grado de continuidad política y económica dentro de esos enclaves, lo que llevó a una situación de (relativa) seguridad. En otras regiones, la competición entre las milicias extranjeras y locales por el acceso a los recursos económicos y políticos era la principal fuente de inseguridad para la población local. Sin embargo, en la mayoría de las regiones, alguna forma de acomodamiento entre grupos armados y élites locales, que parecían haber encontrado un beneficio mutuo en la consolidación de una situación de "ni-paz-ni-guerra"⁵, se convirtió en una característica y conductor principal de la guerra civil congoleña. En el este del Congo particularmente, numerosas estructuras de gobierno informales emergieron en esos enclaves militares, que ofrecían alguna forma de "protección" a los actores económicos locales. Estas estructuras sentaron progresivamente el marco para la interacción local social y económica. Su éxito se

basaba en parte en sus capacidades para confiar en algunas de las piedras angulares de la competición patrimonialista económica y política, mientras que al mismo tiempo se desarrollaban sobre las redes económicas "informales" que emergieron como reacción al marco patrimonial depredador del estado⁶. Esto explica por qué el acceso a las ventajas económicas y el control de las redes de comercio locales eran a menudo los objetivos principales de estos grupos armados: como en cualquier marco de protección privado, facilitaba potencialmente que los líderes rebeldes se convirtieran en "gobernantes" legítimos⁷. En cualquier caso, ésta dialéctica de la protección privada explica por qué la vehemente naturaleza del conflicto (por ejemplo: "ni-guerra-ni-paz") en el este del Congo, creó en algunos casos unas cuantas oportunidades para los actores económicos y políticos. Mediante su asociación con los líderes rebeldes, podían potencialmente consolidar su control sobre los recursos locales: mientras que las milicias sacaban provecho de la existencia de una explotación previa a la guerra y de las redes de comercio para asegurar su propia existencia, podían también desplegar su poder militar para proteger la empresa de "aquellos actores dispuestos a correr los riesgos propios del operar en esas condiciones"⁸. En otras palabras, tanto las milicias como los hombres de negocios (como algunos comerciantes, intermediarios y criminales declarados) se aprovecharon cada vez más de la naturaleza de baja intensidad del conflicto congoleño, porque podían utilizar la distorsión subsiguiente de los mercados de materias primas y recursos para monopolizar los recursos locales de explotación y comercio.

Aunque estas observaciones parecen confirmar, al menos parcialmente, el argumento de los economistas políticos sobre la interconexión entre los recursos naturales, el comercio y la prolongación del conflicto⁹, ésta relación no es tan unidimensional como se suele presentar. Primero, los datos disponibles sugieren que generalmente no eran (sólo) los militares los que sacaban provecho de esta violencia económica. Más bien, sus problemas económicos así como su falta de control sobre el interior de la región (donde se explotan los recursos naturales) los hacía finalmente inferiores con respecto a las redes de comercio establecidas y preexistentes. Según Eric Kennes, "las numerosas redes informales preexistentes y a veces altamente estructuradas no eran creadas por la implicación militar, aunque han sido controladas por ellos... [Los militares] tratan sin embargo de explotar [estas] redes en su provecho, controlando los puntos esenciales de acceso como

aeropuertos y puestos de comercio con el fin de recaudar los impuestos.”¹⁰ Tal y como sugiere Kennes, los beneficios de la extracción de los recursos naturales y del comercio han mostrado ser una parte extremadamente difícil de control tanto para los rebeldes como para los gobiernos en guerra, primero por la poderosa situación de varios intermediarios que se llevaban los mejores beneficios de ese comercio, y segundo porque los esfuerzos de los rebeldes y gobiernos para monopolizar la extracción de los recursos en zonas de guerra subsaharianas generalmente se han topado con fracasos estrepitosos.

¿Una confirmación de práctica patrimonial?

El proceso de transición en la RDC difícilmente ha sido capaz de invertir estos mecanismos de acumulación privatizados. La diferencia es que ahora las fuerzas rebeldes están siendo gradualmente reemplazadas por representantes del “estado” congoleño. Como parte de éste proceso de paz, las administraciones locales están siendo reintegradas en el marco estatal nacional y de nuevo tienen que informar a los políticos en Kinshasa. Los diferentes componentes del gobierno de transición han nombrado a nuevos administradores que han sido situados en cada rincón del país. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera la primera fase de un proceso más amplio de reconstrucción del estado, pronto reconfirmó las prácticas de gobierno basadas en el clientelismo y el patronage^A. Las estrategias locales de explotación y de control parecen haber sido integradas en el marco político nacional y legítimo, y han sido consolidadas como directrices principales de los representantes locales de la autoridad.

Probablemente, la persistente lógica de las políticas en provecho propio es más visible en el sector de los recursos naturales congoleños. Durante la guerra, numerosos panelistas de la ONU describieron con gran detalle las redes de trabajo activas en la explotación ilegal de las riquezas mineras congoleñas. Aunque inicialmente se limitaban al negocio de ejércitos extranjeros, numerosos informes dejaron claro que las redes de trabajo de la élite congoleña eran tan activas como nadie en el robo de las riquezas naturales de su país. Un informe de la comisión parlamentaria congoleña encabezada por Cristophe Lutundula y establecida para investigar los contratos mineros firmados entre autoridades del gobierno y líderes rebeldes entre 1996 y 2003, concluyó en junio de 2005 que la corrupción en el

sector minero congoleño se había vuelto endémico. El informe identificaba diversas compañías implicadas en negocios fraudulentos (incluyendo algunas próximas al presidente Kabila) y recomendaba la finalización o renegociación de docenas de contratos. De cualquier forma, a pesar de su liberación, el negocio en RDC siguió como de costumbre: durante la última mitad de 2005, el número de préstamos para derechos de exploración de áreas mineras ricas se multiplicaron hasta por cuatro. Mientras que la actual venta de contratos de explotación representa una doble oportunidad para las élites del Congo, también beneficia a las estructuras de poder y élites en la periferia. Hoy, las compañías mineras internacionales se ven cada vez más forzadas a buscar la "protección" de las élites políticas si quieren (re)iniciar sus actividades.

A pesar del proceso de paz, los violentos líderes político-militares locales y las élites económicas han sido capaces de salvaguardar sus estructuras de control sobre el acceso a los recursos naturales que fueron instituidas durante la guerra. Adicionalmente, las autoridades políticas recientemente nombradas han tratado de obtener su parte del pastel y han introducido sus propios mecanismos de control de los recursos. En algunas áreas, esto ha provocado una competición entre diferentes representantes del estado. Un ejemplo interesante ha sido la reciente lucha por el control sobre el sector de la casiterita en Walikale. Ahí, a finales de 2004, tropas de la antigua RDC y de Kabila se enfrentaron por lo que se consideraba que eran intereses en competición en las minas de casiterita de la región. Desde entonces, la brigada FARDC desplegada por Kinshasa controla cualquier movimiento comercial en el área – favoreciendo ciertas compañías y desfavoreciendo otras para que entren en el comercio de minerales. A mediados de 2006, éste área fue de nuevo desestabilizada cuando se planteó estacionar nuevas tropas FARDC, cambio que personalidades prominentes de Goma y de la octava región militar estaban manipulando en beneficio propio. El área Walikale sigue siendo frágil por ser una de las principales regiones de explotación de casiterita, lo que provoca regularmente choques entre las unidades FARDC y las unidades FDLR por el control de los sitios mineros. También conduce a una creciente frustración entre las autoridades locales tradicionales, que dependen de unidades del ejército para obtener su parte del comercio minero. De cualquier modo, jefes locales tradicionales han desarrollado diversas estrategias para incrementar su acceso al comercio minero local, incluyendo partenariados con compañías comerciales.

Los mecanismos de protección privada como el arriba citado están siendo confirmados y (re)introducidos en todos los niveles de la jerarquía política. Esto, a menudo no es el resultado de una estrategia prediseñada o plan orquestado, sino que simplemente surge de una falta de recursos y de capacidades de gobierno. En la provincia de Maniema por ejemplo, los administradores provinciales se quejan repetidamente de que carecen de los recursos para gobernar la provincia y para apoyar las iniciativas de desarrollo locales. Sorprendentemente, en todos los niveles de la sociedad, se han puesto una multitud de impuestos que deberían generar los ingresos necesarios para permitir el funcionamiento de la administración local. Una mirada más de cerca sobre las prácticas locales de recaudación de impuestos revela que sólo una pequeña parte de los recursos percibidos se envía al tesoro público. La mayor parte de los impuestos ha de alimentar las estructuras paralelas que han sido instituidas por las autoridades provinciales, directores de departamentos provinciales, ejército, comandantes de policía, etc. En 2006, una de esas estructuras incluso era controlada directamente por las autoridades provinciales y tenía por objetivo maximizar las rentas a partir de un control consolidado sobre el comercio local de recursos. En cada mina de diamantes, había agentes que informaban directamente al gobernador mediante su gabinete. Su nombramiento era el resultado de negociaciones, y los mejores puestos se ofrecían a los agentes más leales. Las estructuras puestas en pie por esos agentes para generar ingresos mediante la recaudación de impuestos han reemplazado las antiguas estructuras de explotación y han marginado a los jefes locales tradicionales (que solían tener su parte en el comercio minero cuando el viejo código minero aún estaba vigente) así como a otros comerciantes.

De cualquier forma, la depredación no se limita al sector minero. En cualquier lugar de la vida pública, la gobernanza hoy se reduce a la colecta de dinero para uso privado. Para la mayoría de los administradores, comandantes de armada y oficiales de policía, la creatividad no tiene límites a la hora de explotar a la población congoleña. Puestos de control, convocatorias, multas e impuestos se han convertido en una táctica ampliamente usada para incrementar los ingresos personales. Todos los niveles de la sociedad tienen que lidiar con estas prácticas: desde el granjero que se enfrenta a los representantes de las divisiones de desarrollo rural, producción agrícola, medioambiente y transporte, a las ONGs

locales, de las que cada nueva iniciativa es vivida por los administradores del estado como una oportunidad para generar recursos adicionales. Los cargos estatales se han convertido en la mejor garantía para asegurar el control de las redes de comercio y mecanismos de explotación que fueron instituidos durante la guerra. Los gobernadores de provincia, comandantes de policía, directores de administraciones provinciales y “*chefs de poste*”^B locales”, todos, tratan de explotar sus cargos oficiales para generar recursos en provecho personal.

Esta reconfirmación de práctica patrimonial parece confirmar de alguna forma el dicho de Tocqueville sobre el antiguo régimen francés, y que más tarde se aplicó al sistema político zaireño, que el gobierno político ha de establecerse entre los antiguos poderes, sin llegar a destruirlos. Según Thomas Callaghy¹¹, en Zaire había “que lidiar con grupos y autoridades locales – tradicionales, casi tradicionales y en transición, todas en el contexto de intrincados patrones facciosos locales (...) y de redes patrón-cliente y de inversión que a menudo unen lo local con niveles superiores.” Lo que realmente distingue la forma de gobierno del estado zaireño/cogoleño, es por tanto, su tendencia a las concesiones y a la mediación más que a la abolición o sustitución de las estructuras sociales. La lucha subsiguiente que ha estallado y sigue estallando, entre las diferentes fuentes de autoridad, a nivel local, nacional e incluso regional no se puede categorizar simplemente entre líneas “moderno-tradicionales” o “formales-informales”, sino que conlleva una combinación de patrimonialismo central y autoridades paralelas dispersas que están embarcadas en una búsqueda perenne del control social.

Existe sin embargo una gran diferencia entre el periodo mobutista y el actual: sus siempre crecientes niveles de violencia estructural y física imparables. El peor registro al respecto es el del recién creado y unificado ejército congoleño (FARDC, o *Forces Armées de la RDC*). Hacia 2006, la misión de Naciones Unidas en el Congo finalmente reconoció que las FARDC se habían convertido en su peor pesadilla. Una serie de escándalos de corrupción en el ejército congoleño apuntaban a una estrategia para mantener la inseguridad y beneficiarse de la depredación económica. En Kivu del Norte por ejemplo, numerosas facciones del ejército han competido activamente por el control de los puestos fronterizos regionales, y también para tener una parte en el tráfico de equipamiento militar. Cada mes, el tráfico organizado de estos equipos hacia las diversas fronteras reportan millones

de dólares. Sin embargo, éste tráfico tiene el efecto indirecto de destrozarse los mercados de comida locales porque las raciones militares se venden a precios extremadamente bajos. En regiones más ricas en recursos como Kivu del Sur y Katanga, el control militar sobre la explotación artesana y el comercio proporciona fuentes adicionales de ingresos. Tal y como ocurría durante la guerra, los agentes militares controlan los puntos de entrada a los principales sitios mineros, donde fuerzan a los mineros y comerciantes a pagar impuestos (ilegales). Mientras tanto, los puestos de control a lo largo de las rutas principales, que antaño eran controladas por los soldados rebeldes, son ahora ampliamente tomadas por las unidades regulares del ejército. En algunas zonas, el número de puestos de control incluso ha aumentado desde el fin formal de la guerra. Los ingresos generados con esos puestos de control se redistribuyen en gran parte en diferentes niveles de las estructuras de comando del ejército.

Numerosas fuentes confirman que esta imposición ilegal está adquiriendo un creciente carácter sistémico. Tanto en la policía nacional como en el ejército, un potente marco de "protección" parece estar instituido. La estrategia siempre es la misma: forzando simultáneamente a pequeños actores económicos a meterse en una depredación violenta (principalmente cortando las posibilidades de desarrollo), ofreciendo a cambio un servicio alternativo de seguridad, se pone en pie un "negocio de protección" que impregna efectivamente el sistema político. Estas prácticas han supuesto una pesada carga para la población local, que se encuentra constantemente forzada a negociar su seguridad con las unidades del ejército y las fuerzas de policía. Además, la recaudación de impuestos ilegales ha afectado seriamente a las capacidades comerciales de los pequeños comerciantes.

Mientras que esta situación no parece muy diferente de la de la era Mobutu, la diferencia entre la situación actual y los patrones históricos de patrimonialismo es el uso sistemático de la violencia por estos marcos de protección privados. Durante las últimas etapas del gobierno de Mobutu, estructuras de protección privada similares fueron desarrolladas por las diferentes fuerzas armadas. Sin embargo, la escala y el impacto de esas estructuras se han incrementado considerablemente durante la guerra y ha sido confirmado durante el periodo de transición. Hoy en día, cada comandante local fuerza a sus soldados a coleccionar impuestos: una parte de esas tasas queda en manos de los propios soldados,

mientras que la otra parte se divide entre los diferentes niveles del mando militar. La lealtad se compra dando a los protectores políticos una parte del ingreso ilegalmente percibido. Los mismos mecanismos han sido instituidos dentro de las estructuras de la policía nacional. Los comandantes de policía se preocupan mucho por obtener un puesto en las zonas mineras, pero a su vez han de recompensar a sus superiores por su nombramiento. Esta estrategia de generar lealtad vía la complicidad económica crea fuertes vínculos personales que son muy difíciles de superar por los soldados integrados del ejército o por oficiales de policía en diferentes unidades. Es más, en la mayoría de las zonas esta estrategia de depredación se ha convertido en una condición estructural de la vida cotidiana.

Estas consideraciones suscitan algunas preguntas acerca de los resultados de las recientes elecciones en el Congo. Dichas elecciones se presentan por lo general como el último peldaño de la transición hacia la paz y como el comienzo de una nueva fase basada en el gobierno democrático y legítimo. Sin embargo, el resultado final puede ser un simple retorno a la era post-independencia del Congo, cuando el acceso al poder político estaba determinado por las redes patrimoniales antes que por la representación democrática. Mientras que estas prácticas de gobierno facilitan la consolidación de varios complejos de poder locales que emergieron durante la guerra, la continua competición entre estos complejos por el control de los recursos locales difícilmente puede evitarse, y es incierto saber de qué forma podría serlo. Mientras que oficialmente la "transición" en Congo ya ha pasado, otro incierto futuro está en el horizonte...

* Koen VLASSENROOT y Timothy RAEYMAEKERS son miembros del Conflict Research Group de la Universidad de Gante. Esta ponencia fue presentada en el marco de las Jornadas Sobre Conflictos organizadas por el Grupo de Estudios Africanos (Universidad Autónoma de Madrid) y celebradas en La Casa Encendida de Madrid del 11 al 14 de Diciembre de 2006.

Ponencia traducido por **Elsa GONZÁLEZ AIMÉ**.

NOTAS

¹ Ver MEHLER, A. y TULL, D. "The hidden costs of power-sharing: reproducing insurgent violence in Africa" en *African Affairs*, volume 104, n° 416, 2006, ps. 375-398.

² cf. *Congo: fame di guerra. Giovani e violenza nel primo conflitto "mondiale" africano*, Dottorato di Ricerca in Scienze Antropologiche (XVI ciclo), Università degli Studi di Torino, 2004.

³ MENKHAUS, K. *Kenya-Somalia Border Conflict Analysis*, USAID, 31 de Agosto de 2005.

⁴ VLASSENROOT, K. Y RAEYMAEKERS, T. *The Formation of New Political Complexes: Dynamics of Conflict in Ituri, Democratic Republic of Congo*, Occasional Paper, Centre of African Studies, University of Copenhagen, Octubre de 2003.

⁵ Richards, 2005.

⁶ RAEYMAEKERS, T. *The Power of Protection. Governance and Transborder Trade on the Congo-Ugandan Frontier*, Unpublished PhD Thesis, Ghent, 2007 (próxima publicación) y LUND, C. "Twilight Institutions: An Introduction" en *Development and Change*, vol. 37, Issue 4, Julio de 2006.

⁷ TILLY, C. "War Making and State Making as Organized Crime" en EVANS, P. et al. (eds.) *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

⁸ LONGLY *Livelihoods, Chronic Conflict and Humanitarian Response: A Synthesis of Current Practice, Working Paper 182*, Overseas Development Institute, Londres, 2002.

⁹ LE BILLON, P. "The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts" en *Political Geography*, n° 20, 2001, ps. 561-584 (collier 1999, Le Billon 2001) y COLLIER, P. *Doing Well Out of War*, Paper prepared for Conference on Economic Agendas in Civil Wars, Londres, 26 y 27 de Abril de 1999.

¹⁰ KENNES, E. "Footnotes to the Mining Story" en *Review of African Political Economy*, n° 93/94, vol. 29, Septiembre-Diciembre de 2002.

¹¹ CALLAGHY, T. *The State-Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective*, Columbia University Press, Nueva York, 1984 p. 62.

^A N.d.T.: empleamos éste neologismo para referirnos, tal y como significa en inglés, al apoyo que una persona influyente da a alguien a cambio de su apoyo, y por extensión al sistema que lo permite.

^B Respetamos la expresión original, que significaría "jefe de puesto" en francés.

BIBLIOGRAFÍA:

BALLENTINE, K. Y SHERMAN, J. (eds.) *The Political Economy of Armed Conflict. Beyond Greed and Grievance*. Lynne Rienner Publishers, Boulder y Londres, 2003

BAYART, J-F., ELLIS, S. e HIBOU, B. *The Criminalization of the State in Africa*, James Currey and Indiana University Press, Oxford y Bloomington, 1999

<http://www.relacionesinternacionales.info>

CALLAGHY, T. *The State-Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective*, Columbia University Press, Nueva York, 1984

CALLAGHY, T., KASSIMIR, R. y LATHAM, R. *Intervention and Transnationalism in Africa. Global-Local Networks of Power*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001

COLLIER, P. *Doing Well Out of War*, Paper prepared for Conference on Economic Agendas in Civil Wars, Londres, 26 y 27 de Abril de 1999

DUFFIELD, M. *Global Governance and the New Wars. The Merging of Development and Security*, Zed Books, Londres, 2002

JOURDAN, L. *Congo: fame di guerra. Giovani e violenza nel primo conflitto "mondiale" africano*, Dottorato di Ricerca in Scienze Antropologiche (XVI ciclo), Università degli Studi di Torino, 2004

KENNES, E. "Footnotes to the Mining Story" en *Review of African Political Economy*, n° 93/94, vol. 29, Septiembre-Diciembre de 2002

LAUTZE, S. y RAVEN-ROBERTS, A. "Violence and Complex Humanitarian Emergencies: Implications for Livelihoods Models" en *Disasters*, 30 (4), 2006, ps. 383-401

LE BILLON, P. "The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts" en *Political Geography*, n° 20, 2001, ps. 561-584

LONGLY *Livelihoods, Chronic Conflict and Humanitarian Response: A Synthesis of Current Practice, Working Paper 182*, Overseas Development Institute, Londres, 2002

LUND, C. "Twilight Institutions: An Introduction" en *Development and Change*, vol. 37, Issue 4, Julio de 2006

MEHLER, A. Y TULL, D. "The hidden costs of power-sharing: reproducing insurgent violence in Africa" en *African Affairs*, volume 104, n° 416, 2006, ps. 375-398

MENKHAUS, K. "Vicious Circles and the Security Development Nexus in Somalia" en *Conflict, Security and Development*, vol. 4, n° 2, Agosto de 2004.

MENKHAUS, K. *Kenya-Somalia Border Conflict Analysis*, USAID, 31 de Agosto de 2005

RAEYMAEKERS, T. "Collapse or Order? Questioning State Collapse in Africa" en *Conflict Research Group Working Paper*, nº 1, Mayo de 2005

RAEYMAEKERS, T. *The Power of Protection. Governance and Transborder Trade on the Congo-Ugandan Frontier*, Unpublished PhD Thesis, Ghent, 2007 (próxima publicación)

TILLY, C. "War Making and State Making as Organized Crime" en EVANS, P. et al. (eds.) *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985

VLASSENROOT, K. Y RAEYMAEKERS, T. *The Formation of New Political Complexes: Dynamics of Conflict in Ituri, Democratic Republic of Congo*, Occasional Paper, Centre of African Studies, University of Copenhagen, Octubre de 2003

VLASSENROOT, K. Y RAEYMAEKERS, T. *Conflict and Social Transformation in Eastern DR Congo*, Academia Press, Ghent, 2004